

mp
nueva
política

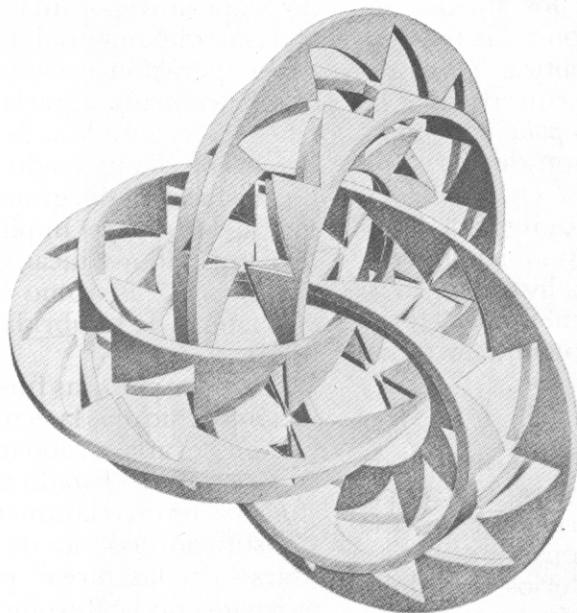
Vol. 1 Núm. 2 abril-junio, 1976

el sistema mexicano

flores olea • gilly • gonzález casanova •
gonzález hinojosa • hamilton • hernández
campos • kaufman • lópez cámara •
martínez de la vega • martínez verdugo •
meyer • mols • muñoz ledo • needler •
purcell • reyna • stavenhagen • ugalde •

SOBRE EL SISTEMA POLITICO Y EL DESARROLLO

Dibujo de Escher



Lo que hemos dado en llamar el *sistema político mexicano* se sustenta fundamentalmente en la existencia y el funcionamiento del partido mayoritario, aun cuando no podría ignorarse el papel de otras formaciones políticas de menor relevancia numérica, cuya presencia en la vida pública del país ha servido para canalizar la participación de ciertas corrientes sociales e ideológicas. Hay también otros factores del juego político, no articulados precisamente como organismos de militancia colectiva, cuya acción, aunque sea a veces circunstancial, representa sin embargo un elemento significativo en el marco de las decisiones políticas. Me refiero, por supuesto, a los llamados grupos de presión.

Me propongo simplemente reflexionar un poco sobre este sistema político, considerando su evolución histórica como parte de los cambios estructurales ocurridos en México después de la etapa armada de la Revolución, y como factor coadyuvante y producto al mismo tiempo de tales transformaciones.

En muchas apreciaciones sobre nuestra vida

política no sólo se soslaya con frecuencia la estrecha relación que ha existido y sigue existiendo entre los mecanismos políticos y la forma de desarrollo general del país, sino se olvida también el itinerario histórico de dichas relaciones. El *sistema político* resulta así un marco abstracto de acciones y decisiones, tanto más misterioso e incomprensible cuanto mayor es su separación de la estructura real del país. Desprendido de sus fundamentos materiales y, por tanto, de su dinámica histórica, el *sistema político*, además de abstracto, aparece petrificado, rígido, casi inmóvil, suspendido en una dimensión más o menos intemporal. En tales condiciones, toda explicación posible se reduce a la conjetura, a la sorpresa de la anécdota, cuando no a la búsqueda de una motivación subjetiva situada en una suprema voluntad individual. El arte del análisis político se transforma en un simple oficio de desciframiento, de lector de cábala o de aprendiz de psicólogo.

No es exagerado afirmar que mucho del *misterio* que parece envolver a nuestro sistema político deriva, no del propio sistema, sino de la

Desprendido de su dinámica histórica,
el sistema político,
además de abstracto, aparece petrificado,
rígido, casi inmóvil

SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO Y EL DESARROLLO

dificultad que hemos tenido los mexicanos para aplicar a nuestra vida pública las normas elementales de la sociología política. Y una de ellas, la primera quizás, exige considerar a la política, es decir, a *la estructura política* de toda sociedad como parte y expresión de estructuras y procesos más profundos, en los cuales encontramos su verdadera lógica interna. Pero otra norma elemental reclama también la utilización de una cierta perspectiva histórica, en la que encontraremos el otro elemento vertebral de dicha lógica interna: el movimiento dinámico, el cambio, la transformación.

Creo que para entender la evolución y *funcionalidad* —valga por ahora el término— de nuestro sistema político, es preciso tener presentes las etapas que ha recorrido el proceso postrevolucionario del país. Consideradas globalmente, no por estrictos criterios cronológicos ni por acontecimientos históricos utilizados para delimitar periodos, sino en razón de formas definidas de desarrollo, inspiradas y alimentadas por un proyecto específico, debemos referirnos a tres etapas claramente delimitadas: *primera*, la etapa de las transformaciones revolucionarias (Obregón-Cárdenas, 1922-1940); *segunda*, la etapa desarrollista (Avila Camacho-Díaz Ordáz, 1940-1970); y *tercera*, la etapa del desarrollo crítico (Echeverría). Las razones de tal delimitación tratarán de explicarse precisamente a lo largo de estas reflexiones.

Quizás los historiadores del futuro encuentren otras nomenclaturas para estas tres etapas históricas, pero por hoy es evidente que las que empleamos aquí corresponden a las que forman parte de nuestra conciencia política actual.

La primera etapa fue el resultado de las contradicciones económicas y sociales que condujeron al movimiento armado de 1910. Producto de esas contradicciones, el programa central de la Revolución Mexicana se desdobló, por así decir, en dos grandes líneas o vertientes

de propósitos: por un lado, el impulso decidido al desarrollo material del país, sobre la base de la recuperación nacional de los recursos básicos, la reforma agraria, las obras de infraestructura económica, la industrialización y la expansión del mercado interno; por otro lado, la satisfacción de grandes demandas sociales del pueblo, lo que implicaba, entre otras cosas, una vasta labor educativa, asistencial y de seguridad social, así como considerables esfuerzos en materia de salubridad, vivienda y bienestar social.

Estas dos políticas fundamentales de la Revolución Mexicana, la económica y la social, sólo podían llevarse a cabo mediante la acción vigorosa del nuevo Estado mexicano, cuyas atribuciones fueron claramente establecidas en la Constitución Política de 1917. Nada podía realizarse sin las tareas promotoras del Estado emanado de la Revolución, a cuyas atribuciones institucionales la Constitución agregaba precisas obligaciones programáticas.

Los primeros gobiernos revolucionarios, respondiendo sin duda a las exigencias del nuevo proyecto nacional, emprendieron la empresa de transformar al país mediante una amplia política de reformas estructurales, a las cuales se oponía no sólo la organización social tradicional, sino también la propia escasez de recursos y condiciones materiales. La única alternativa parecía ser una poderosa movilización de las fuerzas sociales desatadas por la Revolución, medida que pasaba necesariamente por la construcción de un nuevo sistema político.

La etapa de la lucha armada había desembocado, políticamente, en la dispersión de los centros de poder y en el caudillismo. Esta dispersión política significaba un obstáculo más al programa revolucionario, pues no sólo debilitaba al nuevo Estado revolucionario por la multiplicidad caótica y la pugna circunstancial de intereses políticos locales, sino favorecía también la resistencia más coherente de las clases reaccionarias del país.

Fundación del PNR.
Comité Ejecutivo.



Foto. Archivo Casasola

Con el nacimiento
del PNR
nace también
lo que llamamos
comunmente el sistema
político mexicano

Por otra parte, el doble propósito revolucionario de promover el desarrollo económico de la nación y atender las demandas sociales del pueblo mexicano, contenía larvada una peligrosa contradicción, derivada justamente de los escasos recursos de que disponía el Estado: o bien se impulsaba el desarrollo económico en menoscabo de la política social, o bien se daba prioridad al bienestar de las mayorías populares con grave perjuicio de la política económica. No había recursos ni condiciones para realizar al mismo tiempo las dos políticas. Tarde o temprano tendría que escogerse entre esos dos caminos, con indudables riesgos en cada uno de ellos.

Sin embargo, aunque la opción que habría de tomarse finalmente no dejaba lugar a dudas —el bienestar social era inconcebible sin un verdadero desarrollo económico—, el dilema no se presentó en realidad sino en una época posterior a las primeras grandes transformaciones revolucionarias. Subrayo la contradicción porque de alguna manera su visible inminencia contó necesariamente en los cálculos que con-

dujeron al diseño del sistema político mexicano.

La imprescindible movilización de las fuerzas revolucionarias en apoyo de un programa de transformaciones, la necesidad de superar, para ello, la dispersión política y el caudillismo, y la previsión, en fin, de una eventual contradicción programática que podría gestar tensiones o conflictos sociales, fueron razones suficientes para decidir la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1928, aglutinándose en él a los sectores mayoritarios de vocación revolucionaria.

Con el nacimiento del PNR nace también lo que llamamos comúnmente el sistema político mexicano, pues la aparición y desarrollo de ese partido —primera organización de masas en la historia de México— establecieron las reglas del juego que, para bien o para mal, habrían de regir la vida pública del país durante un período cuyo fin aún no se vislumbra: en un par de años habrá llegado ya al medio siglo.

La configuración de esas reglas del juego político en México sirvió, en primer término,

Calles Prestidigitador.
 Dibujo de Siqueiros
 en EL MACHETE,
 27 de noviembre de 1924.

para establecer los campos de la confrontación durante la primera etapa histórica en la que nos hemos situado: de un lado, las fuerzas de la Revolución, canalizadas dentro del partido mayoritario, en apoyo de un proyecto definido de transformaciones económicas, sociales y mentales; del otro, las fuerzas de la reacción conservadora, abiertas o disfrazadas, que tarde o temprano tendrían que promover sus propios instrumentos de militancia política.

La relación que existe entre la creación del PNR y la política de transformaciones revolucionarias emprendida por la serie de gobiernos que va de Calles a Cárdenas, es una relación de necesidades recíprocas. Si la tarea de reformas y cambios realizada por esos gobiernos sólo fue posible en considerable medida gracias a la existencia de un sistema político orgánico, definido por la acción del partido mayoritario, la constitución de éste, a su vez, sería inexplicable sin la acción catalizadora del proceso revolucionario y sus demandas de transformación.

Contó también, durante esta primera etapa, una particular configuración social del país, heredada, en parte, de las estructuras tradicionales, pero estimulada ahora por la presencia de nuevas formaciones sociales alimentadas activamente por la reciente conmoción revolucionaria. Al lado de una población mayoritaria de clase campesina, se entreveraban núcleos incipientes de un proletariado urbano, una burguesía comercial e industrial, y, en fin, una clase media reducida todavía, aunque activa y participante en las tareas políticas. Frente a estos componentes virtuales de una nueva organización económica, social y política, subsistían aún los enemigos tradicionales del cambio histórico y la integración nacional: la clase terrateniente y sus aliados reclutados en las filas de la Iglesia y la clase media conservadora.

La etapa de las transformaciones revolucionarias tuvo a su favor el hecho de que las primeras reformas estructurales —reforma agraria, reforma educativa, expropiaciones, nacionalizaciones, política hidráulica y política fi-



nanciera— representaron por igual estímulos fundamentales al desarrollo económico y satisfacción inicial de demandas sociales. El nuevo sistema político, ligado estrechamente a dichas reformas, derivó —por la estructura misma del partido mayoritario— hacia una vasta organización de las clases populares, la campesina y la obrera primordialmente, sobre la base de una satisfacción adicional a sus aspiraciones gremiales.

Debemos agregar también que la coherencia inicial del proyecto revolucionario de México, su combinación orgánica de intenciones normativas, propósitos definidos y realizaciones concretas, se facilitó en gran medida por el marco internacional que configuraban la gran depresión económica del sistema capitalista y las contradicciones imperialistas que anunciaban la Segunda Guerra Mundial. La perceptible necesidad de una alianza antifascista frenó sin duda las tentaciones imperialistas de *desestabilizar* o disuadir al menos la política de reformas emprendida por los gobiernos revolucionarios de México, política que escandalizó

el régimen de Cárdenas,
cerró el ciclo de las grandes transformaciones revolucionarias, liquidándose
la época del caudillismo,
los levantamientos militares
y las subversiones armadas de inspiración reaccionaria

particularmente a las potencias occidentales durante el régimen del general Cárdenas, sobre todo al llevarse a cabo la expropiación de las industrias petroleras, en 1938.

Sin embargo, si el panorama de la política internacional favoreció la labor revolucionaria del gobierno cardenista, coronando el ciclo de la etapa de transformaciones estructurales, en la esfera interna afloraron los desajustes sociales y políticos que había incubado la Revolución Mexicana. Surgen entonces, como respuesta glandular a la aceleración revolucionaria del régimen de Cárdenas, los movimientos reaccionarios que brotaban de una sociedad tradicional afectada profundamente en las bases de su sistema.

Fue aquí donde mostró su eficacia el sistema político diseñado a fines de la década anterior, pues aunque las corrientes reaccionarias todavía intentaron sabotear la obra cardenista mediante una oposición errática y semiclandestina, acuartelada en las iglesias, las universidades y las agrupaciones paramilitares de inspiración fascista, finalmente se vieron obligadas a someterse a las reglas del juego establecidas por el sistema político. Surgieron entonces, como organizaciones políticas de cara visible, el Partido Acción Nacional y la Unión Nacional Sinarquista, claramente vinculados a los sectores más conservadores de la clase media tradicional y del clero católico.

La labor del régimen del general Cárdenas, decíamos antes, cerró el ciclo de las grandes transformaciones revolucionarias, dejando, entre otras muchas cosas, la consolidación del sistema político mexicano, no sólo evidente por el reforzamiento y la reestructuración del partido mayoritario, que en 1936 se transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), sino también por haber hecho entrar al sistema, como partes de él, a las organizaciones políticas de la derecha militante, liquidándose definitivamente la época del caudillismo, los *levantamientos* militares y las subversiones armadas de inspiración reaccionaria.

Casi se ha vuelto una norma obligada a atribuir el cambio de política que sobrevino después, a una mala elección de la persona que habría de suceder al general Cárdenas en la Presidencia de la República. Creo que es un grave error subjetivar a tal grado las grandes etapas de nuestra historia contemporánea, pues remitimos entonces el criterio de explicación a esferas inaccesibles de carácter personal, sustrayéndonos del verdadero terreno del análisis político.

Lo cierto es que los orígenes de la etapa que hemos llamado *desarrollista* —por la aplicación prolongada de un nuevo modelo de desarrollo nacional cuyas características analizaremos después— hay que buscarlos, primero, lógicamente, en las contradicciones estructurales y programáticas del propio proceso revolucionario, y después, en las condiciones que impuso a México la Segunda Guerra Mundial, con toda

Lázaro Cárdenas.

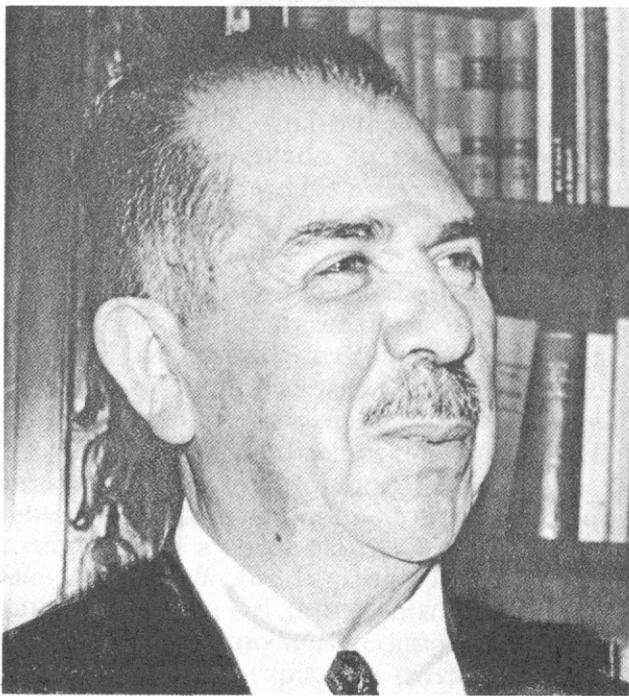


Foto Hnos. Mayo

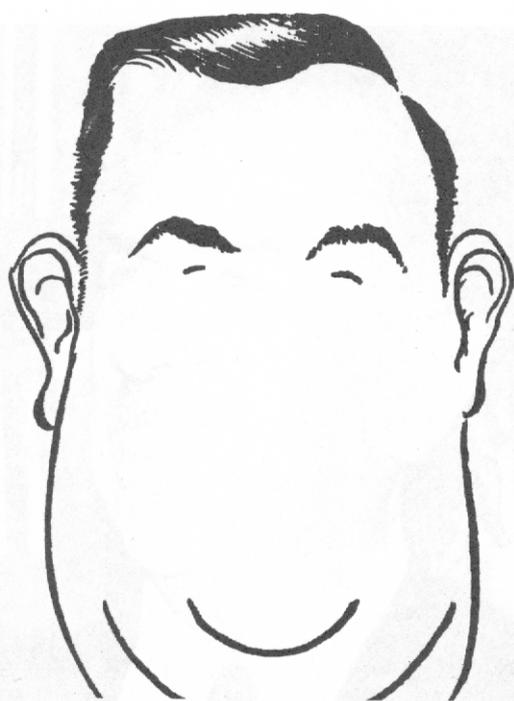
la concepción desarrollista basó su justificación histórica en la escasez de recursos y el atraso del país

su secuela posterior de *guerra fría* y división planetaria.

Al acercarse el término del gobierno cardenista parecía imprescindible reformular la estrategia del desarrollo nacional, no por lo que tocaba a sus principios y metas generales —que seguían siendo válidos en la medida en que no se habían realizado plenamente—, sino a la luz de las decisiones prioritarias que había de tomar en virtud de los recursos disponibles y, sobre todo, por la necesidad de integrar de alguna manera la economía mexicana a las exigencias de la inminente guerra mundial. De un modo u otro, era inevitable la participación del país en la conflagración que se avecinaba.

La opción interna —orientar el impulso principal hacia la promoción económica, subordinando a ella la satisfacción de demandas sociales— era sin duda la única alternativa válida

Manuel Avila Camacho.
Caricatura de Luis Audirac, 1942.



dada la escasez de medios con que contaba el Estado mexicano. Sin embargo, esta decisión no significaba necesariamente aplazar o frenar la política social, pues una sana promoción del desarrollo económico, materializada en obras de infraestructura, protección agrícola y fomento industrial, se traduciría de cualquier manera en beneficios sociales, a condición de que fuese realizada con el mismo criterio revolucionario y democrático que había inspirado la labor material de la etapa anterior. Se requería, en suma, una política de desarrollo equilibrada geográficamente, sectorial y socialmente. Y nacionalista además. Un proyecto distinto sólo produciría deformaciones económicas, desequilibrios regionales y nuevas desigualdades sociales.

Esto fue justamente lo que ocurrió al llegar al gobierno el general Manuel Avila Camacho, en 1940, habiéndose iniciado ya la Segunda Guerra Mundial, en la que pronto entrarían los Estados Unidos. México fue arrastrado también al conflicto, lo cual significó la subordinación de nuestra política de desarrollo a la economía de guerra. Este hecho fue un factor de especial significación en el rumbo que habría de tomar el país, pues exigió desde el principio la aplicación de un esquema deformado de nuestro desarrollo que habría de alejarse finalmente del modelo original concebido en el programa revolucionario.

Se establecieron entonces prioridades económicas exigidas por necesidades militares ajenas al país; se crearon los llamados *polos de desarrollo* que únicamente acentuaban las desigualdades regionales y sociales, preparándose así lo que alguien llamó después la *alfombra* del capitalismo en México: comunicaciones exclusivas o preferentes, transporte barato, entrega de materias primas, subsidios, facilidades arancelarias, financiamiento y protección incondicional por parte del Estado. Con ello se sentaron también las bases de la estrecha dependencia del país hacia los Estados Unidos, que habría de acentuarse al finalizar la guerra mun-



se crearon los llamados *polos de desarrollo* que únicamente acentuaban las desigualdades regionales y sociales

Portada de la revista
Hoy, junio de 1941.

sión capitalista que produjo la terminación de la Segunda Guerra Mundial: la inversión creciente de capitales extranjeros. Surgió así, en el seno de la vida económica y social del país, un poderoso factor de distorsión que terminó convirtiéndose en el centro de las disputas ideológicas durante varios lustros. Pues además ocurrían los hechos en una atmósfera internacional dominada por la polarización de la llamada *guerra fría*, que sirvió maravillosamente a las superpotencias en pugna para exigir un sometimiento y una dependencia incondicionales a los países situados en sus respectivas órbitas.

En el caso de México, las consecuencias de la postguerra se tradujeron en la adopción oficial de la fórmula desarrollista, lo que necesariamente implicó una modificación programática frente a la estrategia revolucionaria de la etapa precedente. Desde el punto de vista ideológico, el cambio de política representaba un abandono de las finalidades sociales de la Revolución Mexicana y una peligrosa pendiente de claudicación frente a la concepción nacionalista del desarrollo del país. El esquema desarrollista de la postguerra se ajustaba a los desequilibrios provocados por la economía de guerra, a las demandas de una burguesía emergente que había incrementado su poder merced a tales desequilibrios y a los nuevos intereses parapetados en el flujo de las inversiones extranjeras.

La concepción desarrollista basó su justificación histórica en la escasez de recursos y en el atraso del país. Para desarrollar la riqueza de la nación, se dijo entonces, era indispensable fomentar la inversión privada, nacional o extranjera, orientando los esfuerzos del Estado hacia obras de infraestructura que favorecieran y alentaran dicha inversión. Era el principio de la rentabilidad a corto plazo. La teoría de los *polos de desarrollo* fue la panacea: invertir allí donde la relación del *insumo-producto* fuese no sólo más eficaz, sino más redituable desde el punto de vista del capitalista privado. Lo im-

dial. Al mismo tiempo, como una consecuencia lógica de esta nueva fórmula del desarrollo, se redujo considerablemente la atención a la política de bienestar social. Fueron, en fin, los principios generadores del *desarrollismo* que iba a predominar durante los cuatro sexenios siguientes al de Avila Camacho.

En realidad, el gobierno de Avila Camacho representó una fase de transición hacia lo que hemos designado la etapa desarrollista. La guerra mundial fue una contingencia inevitable que creó condiciones desfavorables para la continuación de la política aplicada durante el régimen cardenista. El definitivo fortalecimiento de una burguesía nacional interesada primordialmente en acrecentar su poder económico, su consolidación social y su influencia política fue la tarea específica del nuevo modelo de desarrollo utilizado por los gobiernos de la postguerra.

Sobre la deformación estructural que significó para México la subordinación a la economía de guerra, vino a agregarse ahora una de las consecuencias más negativas de la expan-

El PRI nació
... con las definiciones *estabilizadoras*
que le exigía la estrategia
del desarrollismo.

El PRM se convierte en PRI.
Portada de
la revista MAÑANA, 1946.

portante era promover la industria, la producción, los índices globales del crecimiento económico que mostrasen en cifras matemáticas la expansión del país y... su *capacidad para absorber capitales*.

Los resultados de la política oficial se presentarían así, no como una realización de equilibrio entre el desarrollo material del país y su bienestar social, sino como una insinuante cartilla de presentación ante el inversionista nacional o extranjero. La satisfacción de las grandes demandas sociales quedaba aplazada para cuando el país, confortablemente instalado ya en la galería de los países industriales y con suficientes recursos excedentes, pudiese emprender una sólida política de bienestar general.

Era difícil, sin embargo, aplazar también la protesta social que necesariamente habría de provocar el modelo desarrollista. A pesar de los índices globales del crecimiento económico y la evidente capacidad de México para *absorber capitales*, materializada en el impulso a sus *polos de desarrollo*, la geografía del país y sus disparidades sociales vaticinaban tensiones y conflictos. No podía haber tranquilidad en una sociedad que renunciaba de antemano a la búsqueda de los equilibrios internos, en aras de un disfrazado sistema de privilegios y beneficios minoritarios. El decidido estímulo a los llamados *polos de desarrollo*, detrás de los cuales sólo prosperaban algunas regiones del país y reducidos núcleos sociales, habría de acentuar aún más los contrastes y las contradicciones frente a las vastas dimensiones de la pobreza y el atraso social que los rodeaba por todas partes.

El sistema político, dominado por el aparato organizativo del partido mayoritario, serviría esta vez como marco de contención de las protestas sociales que generó la política desarrollista. Esta nueva variante de la *funcionalidad* del sistema se perfiló claramente al transformarse el Partido de la Revolución Mexicana, de propósitos ideológicos y programáticos ligados



a la obra cardenista, en Partido Revolucionario Institucional, con las definiciones *estabilizadoras* que le exigía la estrategia del desarrollismo. La estructura política del país habría de adecuarse en adelante a una estructura económica y social caracterizada por los desequilibrios y las desigualdades.

El crecimiento y la consolidación de una burguesía concentrada en torno a los polos de desarrollo, y su arrastre inevitable sobre el rápido desarrollo de las clases medias urbanas, fueron las principales consecuencias sociales de la política desarrollista. Sin embargo, la confortable holgura económica de que empezaron a disfrutar estos sectores era sólo uno de los lados de la verdadera situación social del país: en el otro extremo aumentaban también las zonas de la pobreza, cuyas condiciones se agravaban por el acelerado crecimiento demográfico y la disminución o el olvido de la atención debida a las necesidades sociales de la población mayoritaria. A la *eficacia* del sistema político, y particularmente a los instrumentos de control del partido mayoritario, se asigna la tarea de contener las protestas y los conflictos sociales derivados

como típico sector esponjoso y receptivo
la clase media recogió
las demandas contradictorias de la sociedad mexicana
y las convirtió en motivaciones
de su actitud crítica

Cándido Aguilar,
Vicente Lombardo Toledano y
Miguel Henríquez Guzmán,
candidatos a
la presidencia de la República



Foto: Hinos. Mayo

de esa situación polarizada del país.

Los movimientos de oposición no provenían sólo de las estructuras tradicionales y conservadoras de la sociedad mexicana, sino también surgían de las propias fuerzas revolucionarias: campesinos, obreros y sectores críticos de las nuevas clases medias. La creación del Partido Popular, en 1948, en el que se aglutinaron originalmente diversos grupos revolucionarios que advirtieron con claridad los peligros de las nuevas orientaciones políticas del gobierno y el partido mayoritario, fue una primera expresión de las contradicciones existentes en el seno del movimiento revolucionario. Pero también se manifestaron fricciones y divisiones en el seno del movimiento obrero organizado, así como abiertas protestas del sector campesino. Muchas de estas manifestaciones fueron reprimidas con especial severidad.

La mayor fractura o colisión de intereses dentro del sistema político vigente surgió al aproximarse la sucesión presidencial del licenciado Miguel Alemán, ocasión en que se promovieron formalmente las candidaturas de

Miguel Henríquez Guzmán y Vicente Lombardo Toledano. El almanismo y el padillismo habían sido en realidad movimientos pasajeros en los que se amalgamaron vestigios de la época caudillista con sectores reaccionarios de dentro y fuera de México que pretendían frenar o desviar la obra revolucionaria. La batalla electoral de 1952 fue en cambio una traducción política de las divisiones provocadas por el proyecto desarrollista que empezaba a aplicarse en el país.

Aunque el sistema político mexicano *absorbió* finalmente tales divisiones, manteniendo así la estabilidad del país, era evidente que debería buscarse una fórmula adicional para atenuar de alguna manera la creciente protesta de las clases populares. El gobierno del presidente Ruiz Cortines terminó en medio de graves conflictos sindicales, que su sucesor tuvo que reprimir con gran violencia a los pocos meses de iniciar su gestión. La fórmula adicional consistió en preocuparse nuevamente por la política de bienestar social, mediante el recurso de incrementar los recursos del Estado gracias a una

El líder campesino
Rubén Jaramillo
al frente
de una manifestación.



carga fiscal creciente sobre las nuevas y florecientes clases medias del país. Constituyendo estructuras derivadas y en buena medida favorecidas del modelo desarrollista, se consideró que estos sectores medios de la población estaban en condiciones de contribuir eficazmente a cubrir los gastos de una nueva política social que garantizara la tranquilidad nacional y el reforzamiento del desarrollo *estabilizador*, como se le llamó entonces a la estrategia oficial.

Si de algún modo esta variante financiera sirvió para atenuar efectivamente el malestar existente en el campo y las fábricas, estimuló en cambio un creciente descontento en el seno de la clase media mexicana, cuyas dimensiones numéricas representaban ya una nueva marea de necesidades sociales particularmente difíciles de atender por sus exigencias cualitativas: educación, acomodo profesional, reconocimiento social, facilidades urbanas, recreaciones colectivas, participación política, inquietudes ideológicas, etc.

Al reclamarle a la clase media su cuota del desarrollo, la política del crecimiento estabilizador incubó paulatinamente una nueva corriente de protesta y malestar que en pocos años llegaría a situaciones críticas. La década de los 60 fue en México la década de la clase media: los conflictos más graves fueron expresiones de su descontento, de sus aspiraciones insatisfechas y de sus primeras frustraciones estructurales. Como típico sector esponjoso y receptivo, la clase media recogió pronto las demandas contradictorias de la sociedad mexicana y las convirtió en motivaciones de su actitud crítica. Su desbordamiento como conciencia de protesta tuvo consecuencias decisivas en el marco del sistema político mexicano.

En efecto, los desequilibrios estructurales provocados por el modelo desarrollista tuvieron un impacto desastroso en la estructura política del país. No sólo se frenó o se desvirtuó francamente la anterior proyección revolucionaria del partido mayoritario, sino se favoreció también la aparición de prácticas viciosas en los

procesos electorales y en otras formas de participación política. Los compromisos secretos, las transacciones, los *sobres lacrados* y las maniobras electorales eran las fórmulas predilectas para asegurar el predominio del partido mayoritario, con un saldo líquido de corrupción y cacizgos políticos que proliferaron a la sombra de las necesidades de control y manipulación.

Esta situación fue el principal motivo de crítica que empezó a desarrollarse en el seno de las clases medias, cuyo fondo de protesta alimentó continuamente las corrientes de oposición que se manifestaron de manera creciente en la década de los 60: movimientos urbanos, crecimiento y triunfos electorales del Partido Acción Nacional, rebeliones universitarias, conflictos gremiales de clase media, en fin, abstencionismo y desdén por el juego político. Ante esta presión política de las clases medias —sin duda las más revolventes y alertas políticamente—, los métodos de manipulación resultaron ineficaces por las posibilidades limitadas y la propia inercia del sistema político.

Las nuevas contradicciones hicieron crisis precisamente en el conflicto de 1968, que condujo al país a una situación límite —la repre-

queda aún la batalla frontal
contra las deformaciones y los vicios
heredados de la época desarrollista:
la corrupción, el caciquismo
y la manipulación de las organizaciones populares

continuar
la estrategia desarrollista,
al amparo
de un sistema político
dominado por los métodos
autoritarios y represivos



Concentración estudiantil
en el Zócalo, 1968.

Foto Hnos. Mayo

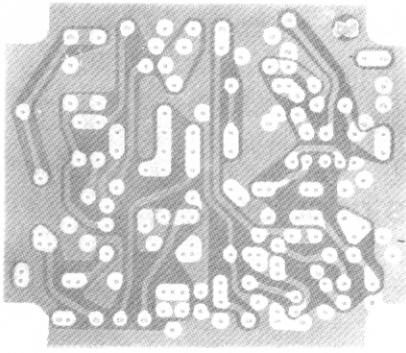
sión— y a la conciencia de una alternativa ineludible: continuar la estrategia desarrollista, al amparo de un sistema político dominado por los métodos autoritarios y represivos para someter las protestas sociales, o corregir el camino para buscar soluciones que condujesen de alguna manera a un nuevo esquema de desarrollo más equilibrado, más justo y más democrático.

Este fue el dilema que se planteó el país como consecuencia directa de la crisis de 1968 y ante el cambio de gobierno que debía ocurrir en 1970. No era sólo un problema de métodos —represión o vía democrática—, sino una cuestión que abarcaba la estrategia misma del desarrollo nacional. Tampoco se trataba únicamente de una satisfacción formal a las exigencias expresadas por la clase media, pues era evidente que los desequilibrios internos se traducirían tarde o temprano en protestas y demandas de las clases populares del país, creándose entonces situaciones altamente explosivas.

El gobierno del presidente Echeverría se definió desde el principio por una búsqueda de soluciones democráticas y por la convicción de que era preciso emprender una política correc-

tiva al modelo de desarrollo promovido durante las tres décadas anteriores. Esta decisión condujo, por lo pronto, a una denuncia expresa de los desequilibrios y deformaciones estructurales generados por la política desarrollista, y al planteamiento de una nueva estrategia nacional que tuviese como objetivo la participación de todos los sectores en las tareas y los beneficios del desarrollo.

Fue la fórmula de lo que se llamaría poco después el desarrollo integral, compartido y democrático. Su correlativo político fue, primero, lo que se designó en un principio como *apertura democrática* (es decir, el rechazo de los métodos represivos, peligrosamente establecidos como solución política durante el conflicto de 1968), y después los intentos de movilización en torno a lo que se definió como una alianza popular revolucionaria que sirviese de apoyo y garantía a las reformas que implicaría la modificación de la política desarrollista. Al partido mayoritario se encomendó la promoción de esa alianza popular, objetivo que lo llevó a adoptar una nueva plataforma de principios y objetivos revolucionarios, substituyendo al mismo tiempo a sus dirigentes nacio-



nales, de corte tradicional y conformista, por figuras políticas de pensamiento progresista y actitud crítica.

El hecho de condenar oficialmente la política desarrollista y proponer un modelo sustituto que tratara de corregir desequilibrios regionales y desigualdades sociales, representó desde luego un paso importante para un eventual replanteamiento del programa revolucionario, pues cualquier tarea concreta en ese sentido requería una indispensable, aunque no fácil, toma de conciencia. Es obvio que no se iban a superar en sólo seis años las deformaciones estructurales acumuladas y consolidadas a lo largo de tres décadas. Pero era urgente dotar de nuevos contenidos ideológicos al aparato del Estado y a las organizaciones políticas del país, señalando claramente los errores, las claudicaciones y las consecuencias negativas de las tendencias predominantes en la etapa precedente.

Los propósitos correctivos del presidente Echeverría provocaron de inmediato reacciones de protesta y de amenazas en algunos círculos oligárquicos del país, que vieron con alarma el reforzamiento del papel promotor del Estado y el nuevo impulso que se dio a la política social, sobre todo en el campo de la educación, la vivienda para obreros, la extensión de la seguridad social y las diversas medidas de protección a los salarios, el consumo popular y la vida urbana.

Las tensiones causadas por las nuevas tendencias del gobierno se acentuaron al advertirse una política exterior que se solidarizaba reiteradamente con los movimientos nacionalistas del Tercer Mundo, promoviendo en forma decidida la redacción y aprobación final, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Resurgieron entonces tendencias autoritarias que intentaban frenar o mediatizar, con el apoyo de los sectores descontentos de clase media, la política emprendida por el gobierno de Echeverría.

Al mismo tiempo, comenzaron a manifestarse corrientes de protesta y malestar en el campo y las fábricas, planteándose una vez más los problemas de tenencia de la tierra, y la autonomía del sindicalismo mexicano, con todas sus derivaciones económicas, políticas e ideológicas. Se ha configurado así una nueva situación social que necesariamente incide en el sistema político mexicano. Frente a las presiones organizadas de los grupos oligárquicos y las condiciones de violencia que han empezado a generarse en el campo y en el seno de las organizaciones sindicales, la estructura política del país muestra signos inequívocos de contradicciones y deficiencias que exigirán revisiones profundas en un futuro próximo.

Aunque han ocurrido ya algunos cambios importantes dentro del aparato político —como la reformulación ideológica y programática adoptada por el PRI a partir de 1972, la unificación del movimiento campesino mediante el Pacto de Ocampo y la revitalización de la CNOP en el seno de las clases medias populares—, queda aún la batalla frontal contra las deformaciones y los vicios heredados de la época desarrollista: la corrupción, el caciquismo y la manipulación de las organizaciones populares. Y falta también el encauzamiento orgánico de importantes sectores de clase media, cuyas aspiraciones no satisfechas —política e institucionalmente— podrían convertirse en un fértil campo de reclutamiento para las tendencias más conservadoras y represivas del país.

Las demandas en favor de un sistema político más eficaz y más abierto sólo tienen sentido en el marco de una estrategia global del desarrollo que supere de alguna manera los desequilibrios estructurales y las desigualdades sociales. En los próximos años habrá de establecerse claramente si esa estrategia es posible y si para ello, el sistema político, y sobre todo el partido mayoritario, son capaces de convertirse en poderosas palancas de transformación y cambio.